

Y el etanol gringo, ahí

SIRIRÍ MARIO FERNANDO PRADO



Y no me refiero a los grandes cultivadores. Existen, por ejemplo, 20.000 trapiches que muelen el producido de 240.000 hectáreas de caña panelera cultivada en 70.000 fincas, con una tenencia de tierra de 3,42 hectáreas por finca, repartidas en 550 municipios de 27 departamentos, generando 1'750.000 empleos, entre directos e indirectos.

Pero sucedió lo impensable: paralelo al montaje de las plantas de etanol, cuyos costos tienen hipotecado peligrosamente a más de un ingenio, el mismo Gobierno, en un acto execrable y malalechudo (y dicen que vengativo), permitió que entrara a nuestro país el etanol gringo producido a partir del maíz —cultivo que está subsidiado por el Tío Sam— y que resulta no solo más barato que el nuestro sino que además, ¡vaya paradoja!, no

sirve para disminuir la contaminación, que fue la razón para que se montaran las mencionadas plantas en nuestro país.

El Gobierno que impulsó el etanol nacional le creó una competencia a todas luces desleal y perversa perjudicando no solo a los ingenios —algunos de los cuales están ahorcados—, sino a los millones de compatriotas que viven o sobreviven de la caña de azúcar.

El nuevo Gobierno conoce esta situación y ha prometido revertir tan nefasta importación; sin embargo, el tiempo apremia y es preciso que la Casa de Nariño y el Ministerio de Agricultura procedan de conformidad y honren su palabra. Han transcurrido ya varios meses y no se ve el humo blanco. Mientras tanto, la situación se agrava peligrosamente cada día que pasa.

EL PASADO GOBIERNO AVALÓ, APOYÓ, impulsó, aplaudió e inauguró varias plantas para la producción del etanol carburante, que en lenguaje simple se mezcla con la gasolina y reduce ostensiblemente la contaminación ambiental.

Ello hizo que los cultivadores de la caña de azúcar aumentaran su producción, porque se preveía un mayor consumo y muchos hicieron a un lado otros sembradíos habida cuenta de la demanda que se venía encima.

Maquillando la deforestación

CÉSAR RODRÍGUEZ GARAVITO



SI EL GOBIERNO DUQUE DEDICARA tanto esfuerzo a combatir la deforestación como le invierte a maquillar la presentación de sus cifras, la tala masiva de bosques estaría disminuyendo en lugar de aumentar cada año. Esa es la conclusión que queda después de ver cómo el Gobierno eludió el debate sobre la pobre meta de deforestación aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la semana pasada.

Como escribí en una columna anterior, lo primero que hizo el Gobierno fue proponer una meta que oficializaba el incremento dramático de la tala. En el proyecto de PND que presentó al Congreso, aumentaba el número de hectáreas que permitiría tumbar: de las 90.000 hectáreas anuales que se había trazado (e incumplió) el Gobierno anterior, pasaríamos a 220.000 hectáreas anuales. Esta última cifra fue el nivel récord que alcanzó la tala en 2017 y equivalía a decir que el Gobierno la adoptaba como su aspiración oficial.

El anuncio desató una ola de críticas. Muchos recordaron que el peor daño que le puede hacer Colombia al clima global es tumbar árboles, que no solo capturan el dióxido de carbono que calienta el planeta, sino que, al ser destruidos, liberan aún más carbono. Otros señalamos que la meta era un incumplimiento abierto de los compromisos internacionales que Colombia asumió en la cumbre de cambio climático de París en 2015 —y de las órdenes de la sentencia de la Corte Suprema que le exige cumplir esos compromisos en la Amazonía, en un caso presentado por 25 jóvenes con apoyo de Dejusticia—. Más de 90.000 ciudadanos firmaron una petición para que el PND mantuviera al menos la meta del gobierno Santos.

En lugar de aprovechar la ocasión para respaldar con hechos sus declaraciones contra la deforestación, el Gobierno decidió responder las críticas con un retoque a la redacción del PND, que incrementa aún más el número de hectáreas taladas permitidas en su cuatrenio. Con una sencilla maniobra matemática, pasó a prometer que reduciría en un 30 % la deforestación; pero este porcentaje sería calculado no sobre las 220.000 hectáreas que había prometido inicialmente, sino sobre el número de hectáreas que se proyecta se estarán tumbando en el país al final del Gobierno, en 2022. Como la deforestación está disparada, esa proyección da un total de 360.000 hectáreas en 2022, lo que significa que el PND aprobado la semana pasada permite que la tala llegue a 252.000 hectáreas (es decir, 360.000 menos el 30 %), lo que es aún más que lo propuesto inicialmente. No sólo la oficialización y la bendición de la emergencia ambiental actual, sino su empeoramiento.

Pero los científicos y la ciudadanía tienen memoria y saben hacer cuentas. Y la comunidad internacional y las cortes no olvidan los compromisos jurídicos que pretende esquivar el Gobierno. Quedó claro que la estrategia del Gobierno es maquillar de verde el discurso y las cifras. Pero sus verdaderos colores quedaron a la vista de todos.

Chócolo



“Toca hacer algo”

FRANCISCO GUTIÉRREZ SANÍN



EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, HAN APARECIDO varios escritos defendiendo la erradicación a marchas forzadas de los cultivos de coca. En sus mejores versiones, exponen básicamente dos argumentos. Primero, que el país “no es viable” —o alguna expresión semejante— con 200.000 hectáreas de coca. Segundo, que por lo tanto medidas como la fumigación con glifosato no se llevarían a cabo como respuesta a alguna presión extranjera, sino en interés propio.

La primera proposición es sensata. Es verdad que el colorido adjetivo de “inviable” se podría aplicar más o menos a cualquier cosa (“un país con carreteras como las nuestras...”, “un país con más baladistas que programadores...”), pero en este caso no dice mucho. Pero por otra parte también es cierto que el hecho de que una importante economía como la cocalera —que según los estimativos que he leído podría representar entre 2 y 5 % de nuestro producto interno bruto— esté en la ilegalidad constituye un problema social muy serio. La incapacidad de pensar y tratar de solucionar ese problema podría marcar la

trayectoria del país por décadas, y convertirse en una importante variable catalizadora para diferentes expresiones de violencia.

Pero entonces aquí surge toda una serie de preguntas que vale la pena plantear y tratar de responder en serio. La primera es cómo se define con un mínimo de precisión el problema, y cuál es la mejor vía para solucionarlo. Si, por ejemplo, dijéramos que el país llegó a la fabulosa cifra de 200.000 hectáreas sembradas de té nadie pegaría el grito en el cielo. Este sencillo ejemplo ilustra una cuestión igualmente sencilla pero muy importante de recordar una y otra vez: el problema no es el cultivo, ni la mata (que no mata), sino su ilegalidad. El arbusto no siempre fue ilegal. Podría dejar de serlo. De hecho, en varios países —incluidos Colombia y Estados Unidos— la marihuana ya fue parcial o totalmente legalizada, y esto no acabó con la sociedad. Por el contrario, dio origen a una próspera y dinámica industria legal, que no está asociada ni a la violencia ni a la criminalidad. Naturalmente, cada caso es específico y lo de la coca podría ser más o menos complejo. El punto es que el objetivo debería ser incorporar al conjunto de la sociedad a la legalidad, y dotar a las regiones donde hay presencia de cultivos ilícitos de bienes públicos y de regulación estatal sería, estable y razonable. Algunos países, también en América Latina, han desarrollado políticas de regulación de este

tipo, con resultados muy buenos (no perfectos, pero los resultados perfectos no existen en el mundo de las políticas públicas).

El actual Gobierno colombiano, que dice abrazar los principios de la “cultura de la legalidad”, ha optado sin embargo por promover otro procedimiento: el de la presencia estatal por la vía de la aspersión aérea. Es difícil imaginarse lo brutalmente destructiva que es esta práctica: para la vida humana, para la vida animal, para el medio ambiente. Y se tomó este camino mientras se buscaba desmontar lo establecido por el Acuerdo de Paz, que proponía una alternativa sensata y de largo plazo. Los sujetos de esa política —cultivadores y otros agentes— cumplieron en proporciones altísimas los compromisos adquiridos. ¿Por qué abandonar el camino?

¿De pronto por “voluntad propia”? ¿Pero de quién en particular? ¿Y para qué? El vecino de columna, Santiago Montenegro, sugiere que para defender las “instituciones republicanas”. No entendí muy bien su razonamiento. Me pregunto si hay algo más destructivo para la democracia y la confianza en las instituciones que esta práctica de chorrrear veneno sobre las cabezas de cientos de miles de ciudadanos, mientras se van ignorando olímpicamente los pactos —de hecho, los contratos— firmados con ellos.

Si: toca hacer algo. Algo que incorpore socialmente, que construya sociedad y Estado.